

El conflicto como pegamento de la España plural

ANTÓN COSTAS

¿Qué puede unir a España, ahora que Cataluña ha dado una nueva vuelta de tuerca al modelo de organización política y que prácticamente no queda otro elemento de igualdad material entre los españoles que la Seguridad Social y la tarifa eléctrica única? ¿Son infundados los temores de que la propuesta catalana se transforme en una fuerza centrífuga incontrolada que acabe en un *big bang* explosivo del Estado? Al menos debemos tomarlos en consideración, no sólo por los conflictos directos que en sí misma plantea, sino porque genera un "efecto imitación" en el resto de comunidades autónomas, que ya han comenzado a incorporar en sus respectivas reformas (véase la propuesta valenciana) lo que podríamos llamar una "cláusula de la nación más favorecida" (similar a la que operó en los tratados bilaterales de comercio entre naciones en el siglo XIX), mediante la cual exigirán que les sea automáticamente aplicado lo que Cataluña consiga para sí en su negociación con las Cortes Generales. El conflicto político irá, por tanto, en aumento.

¿Cómo enfrentarse a este escenario de mayor conflicto que introduce la "España plural"? Las soluciones que se plantean, desde uno y otro lado, intentan reducirlo de diversas formas. Desconfiadas, las fuerzas políticas catalanas que apoyaron el Estatuto utilizan el método del "blindaje", mediante la enumeración exhaustiva y minuciosa hasta la pesadez de todas y cada una de sus competencias. Buscan con ello evitar en el futuro los conflictos jurídicos y políticos que en el pasado han enfrentado a la Generalitat con la Administración central. Intento vano, a mi juicio, y que tiene efectos perversos no deseados. Por un lado, produce una imagen intervencionista del poder político catalán impropia de una sociedad libre. Por otro, será un "corsé" para sus propias políticas. Y, lo que es peor, crea en muchos ciudadanos la percepción de que, aunque no pretenda la independencia, Cataluña busca constituirse en una comunidad aparte del resto; es decir, vivir juntos pero no revueltos.

Desde el lado opuesto las propuestas responden a dos variedades. Unos buscan evitar el con-

flicto devolviendo el *Estatut* a sus remitentes; es decir, ponen la venda antes de que se produzca la herida. Otros aceptan la posibilidad de la reforma, pero siempre y cuando se mueva dentro de los límites del "consenso constitucional", del "espíritu de la transición" y sea aplicable al resto; es decir, café para todos, pero descafeinado. En ambos casos, el conflicto es visto como una fuerza disgregadora de la convivencia. Suponen, en definitiva, que para que la política y el Estado funcionen bien debe existir alguna idea previa y compartida de "bien común" o de "patriotismo".

Sin embargo, es posible que estas explicaciones del porqué una comunidad se mantiene unida sean desorientadoras y hasta arrogantes. Se puede pensar que

el motivo por el cual grupos diversos se mantienen unidos es porque practican ciertas políticas comunes, y no porque estén de acuerdo en unos "principios fundamentales". Más que como elemento misteriosamente anterior a la política, el "interés general" surge del proceso de reconciliación y agregación práctica de los intereses particulares en conflicto; es el resultado de la acción civilizadora de la propia actividad política. En términos más prosaicos, es el roce el que engendra cariño, y no un misterioso sentimiento espiritual. De hecho, tenemos lazos espirituales con muchos países latinoamericanos y, sin embargo, no compartimos ni nación ni Estado. Por el contrario, formamos parte de la Comunidad Europea porque tenemos intereses en con-

flicto y negociamos políticas comunes para reconciliarlos.

Nuestra propia historia nos ofrece ejemplos de cómo el conflicto y la negociación de políticas fue lo que permitió asentar la España contemporánea. La creación en la segunda mitad del XIX de una moneda (la peseta) y de unas aduanas únicas permitió crear un mercado interior único y poner en marcha políticas comunes a los antiguos "reinos" que fueron los fundamentos materiales de su unidad. Especial importancia tuvieron las políticas de comercio exterior (librecambistas o proteccionistas), que aunque provocaron grandes conflictos políticos, sociales y territoriales permitieron forjar alianzas y arreglos entre los intereses de manufactureros catalanes, siderúrgicos vascos y cerea-

listas castellanos; arreglos sobre los que se ha asentado la cohesión económica y territorial de España a lo largo del último siglo y medio.

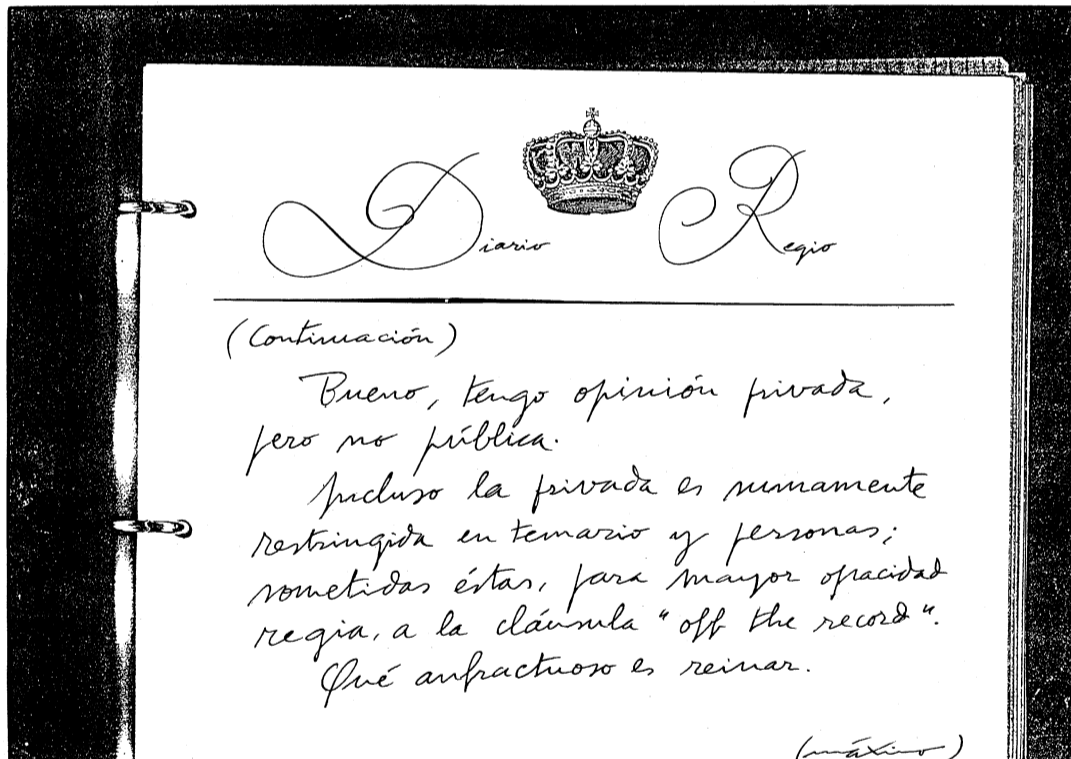
Ahora que ya no tenemos moneda ni aduanas propias, y que el mercado interior ha dejado de estar protegido, se podría pensar que disminuirá esa cohesión territorial. Pero no es así; por ejemplo, a medida que la economía catalana se ha hecho más exportadora, ha aumentado sus vínculos con el resto de la economía española, dado que utiliza más productos intermedios fabricados fuera de Cataluña. Este hecho sugiere que la unidad del mercado no tiene por qué verse alterada por la forma de organización del Estado, especialmente si éste es capaz de diseñar políticas económicas e industriales que fomenten la interdependencia y la proyección internacional de nuestras empresas.

La idea de que el conflicto puede desempeñar un papel importante y constructivo en la cohesión puede parecer sorprendente y hasta paradójica. Los peligros que entraña y los daños que ha causado en el pasado han sido de tal magnitud que es comprensible el rechazo. Sin embargo, la evidencia sobre los efectos positivos del conflicto es bastante rica: un ejemplo es el conflicto entre patronos y trabajadores. El economista y politólogo norteamericano Albert O. Hirschman ha reexaminado esa evidencia y concluye que el conflicto es una característica persistente de las sociedades pluralistas de libre mercado, y que es la contrapartida natural del progreso técnico y de las consiguientes luchas redistributivas —sociales, sectoriales y territoriales— para repartir la nueva riqueza.

Otro resultado, de gran interés para la negociación del Estatuto catalán, es la idea de que, por muy variados que sean los conflictos, es posible clasificarlos en dos variedades: aquellos que dejan un residuo positivo de integración y los que desgarran a la sociedad. Los primeros son del tipo "más o menos", como los relacionados con la financiación y la solidaridad; los segundos son del tipo de "o esto o...", como el debate sobre el término

Pasa a la **página siguiente**

MÁXIMO



CARTAS

AL DIRECTOR

Los textos destinados a esta sección no deben exceder de 30 líneas mecanografiadas. Es imprescindible que estén firmados y que conste el domicilio, teléfono y número de DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicar tales colaboraciones, así como de resumirlas o extractarlas. No se devolverán los originales no solicitados, ni se dará información sobre ellos. Correo electrónico: CartasDirector@elpais.es Una selección más amplia de cartas puede encontrarse en: www.elpais.es

Iniciativa legislativa popular despreciada

El Gobierno de Aragón (PAR/PSOE) decidió el pasado 15 de diciembre seguir alicatando las montañas de la comunidad autónoma, al rechazar en solitario la mera admisión a trámite de una

iniciativa legislativa popular por un proyecto de "Ley para la Protección de la Alta Montaña de Aragón". El proyecto estaba avalado por 30.000 firmas de aragoneses y apoyado por la mayoría de los colectivos conservacionistas y montañeros, no sólo de la región, sino de todo el Estado.

Se trata de un nuevo y grave error que muestra el desprecio de ambos partidos por la participación ciudadana real en la vida política. Así pues, se prefiere mantener poderosos aliados en el mundo financiero e inmobiliario que escuchar, debatir, enmendar y mejorar una propuesta legítima de la ciudadanía aragonesa, muy sensibilizada por el patrimonio natural que representa la montaña y por los desastres medioambientales y económicos que la empresa de la nieve ARAMON (Ibercaja/Gobierno de Aragón) está causando sin reparo alguno.— **Juan Antolín Coma**, profesor de la Universidad de Zaragoza.

Amor ciego

Es sabido que "el amor ciego" y el amor absoluto ciega absolutamente. Uno de los casos más propensos a ello es, como todo el mundo sabe, el "amor a la patria". Buena demostración de ello es que todo un geógrafo-urbanista como Jordi Borja (EL PAÍS, 13 de diciembre), "para entender el presente, para contribuir quizá a que se nos entienda un poco mejor fuera de Cataluña", parta de una premisa evidentemente falsa: la contraposición, durante el franquismo, de una Cataluña "agobiada" y una España "agobiante" ("España, la agobiante España franquista nos resultaba un ente lejano como concepto, opresor en la cotidianidad, amenazador siempre").

Confundir el objeto del agobio (no sólo lo fueron los catalanes, ni principalmente, me atrevería a decir) con el sujeto (el régimen franquista, al que sostuvieron y del que se aprovecha-

ron también no pocos catalanes) es un desvarío. Y más si se pretende dialogar "sin prejuicios ni descalificaciones previas".— **José Antonio Monge Marigorta**, Madrid.

Agur, Aniceto

El pasado 1 de diciembre murió Aniceto Moreno. Había sido concejal socialista del Ayuntamiento de Mallabia durante todas las legislaturas desde que se instaurara la democracia hasta esta última en la que ya no se presentó a las elecciones, porque al estar amenazado tuvo que irse de Euskadi.

Aniceto era un hombre sencillo que vino muy joven a Eibar y que a finales de los sesenta se quedó en Mallabia, y se hizo de Mallabia, y allí sacó adelante a su familia, era un trabajador del metal con profundas ideas políticas y con una gran ilusión por defenderlas y por trabajar por su pueblo, al que tanto quería.

Hace unos años, él y su mujer se enfrentaron a la terrible injusticia de tener que escoger entre irse de Euskadi o quedarse, y si se quedaban sabían que tenían que aceptar la compañía forzada de un escolta que hubiera protegido a un trabajador jubilado, cuya vida iba a consistir en hacer las pequeñas compras del día a día, tomarse unos cafés en los bares del pueblo mientras leía el periódico, charlar con los vecinos, echar la partida e ir semanalmente a los plenos del Ayuntamiento de un municipio de algo más de mil habitantes.

Ésa era la vida de Aniceto y así era feliz, en su pueblo, en su salsa. Al final se fueron, y pudimos comprobar de primera mano la profunda tristeza que el exilio y el desarraigo habían provocado en ellos. Quizá en vida no arropamos lo suficiente a Aniceto, pero estas palabras quieren ser un recuerdo cariñoso y un reconocimiento a su persona, y un fuerte abrazo a su

Pasa a la **página siguiente**

Pasa América Latina por un momento curioso. Es como si todos se hubieran descartado y estuviéramos barajando para dar juego de nuevo.

En los años ochenta, encaramada en la oleada democrática de aquel tiempo optimista, se imaginó la construcción de un regionalismo abierto y así nació por un lado el Mercosur, por el otro la Comunidad Andina y finalmente el Mercado Común Centroamericano. La unidad latinoamericana se producía a través de acuerdos entre las subregiones, que servían de plataforma de lanzamiento hacia un mundo más liberalizado que regenteaba la OMC y nos abría mejores y más transparentes mercados. La relación con EE UU se articularía a través del ALCA, que Clinton lanzó en Miami en 1994, y con Europa a través de acuerdos de región a región. Por aparte México, condicionado por su geografía, había optado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin perjuicio de buscar entendimientos con las otras subregiones.

Todo parecía encajar. La democracia volvía por sus reales y ya no se discutía más sobre sus bondades obvias, luego de años de guerrilla marxista y golpismo militar. La economía de mercado se reconocía hasta por los revolucionarios y, si por las dudas algo faltara, se escribió una agenda de buenas recetas que se llamó Consenso de Washington y allí marchamos hacia el equilibrio fiscal, la apertura comercial y toda la privatización posible.

Barajar y dar de nuevo

JULIO MARÍA SANGUINETTI

Pisamos el nuevo siglo y todo parece cambiado. El ALCA se ha ido diluyendo, y en la reciente cumbre de Mar del Plata, en octubre, los países del Mercosur más Venezuela se opusieron a tratar la idea, por lo menos hasta después de la ronda de la OMC en Hong Kong. Y esta actitud se inscribe, en la visión del exultante presidente venezolano, don Hugo Chávez (nos lo explicó por televisión, *dry-pen* en mano delante de un mapa), en dos ejes: el Monroe, que arranca en Canadá y Washington, pasa por México, sigue por Colombia, atraviesa Perú y aterriza en Santiago de Chile; y por otro lado el eje bolivariano, que comienza en Caracas, se desplaza hacia el Sur por Brasilia, pasa por Asunción y Montevideo y termina en Buenos Aires. En medio de una formidable retórica antinorteamericana, digna de los mejores años sesenta, Venezuela nos reconstruye una especie de guerra fría criolla y bastante virtual, pues bien que cuida su Gobierno del mercado norteamericano, principal destino de su petróleo, que refina y distribuye con una gigantesca empresa filial de Petróleos de Venezuela.

Se ha construido paralelamente una Comunidad Sudamericana de Naciones que es-

tá armando una institucionalidad, mientras entierra el ya secular concepto de Latinoamérica tan esforzadamente impuesto en la comparación —o confrontación— con la cultura del Norte anglosajón. En buen romance, esto significa que México, que ha crecido hasta el punto de compararse con Brasil, es alejado de nuestro proyecto por su acuerdo comercial con los Estados Unidos. La idea en sí carece de racionalidad, cuando Sudamérica es sólo una referencia geográfica, posible sustento de proyectos de infraestructura sobre ríos, puertos o carreteras, pero nunca una identidad histórica y política. Imaginar a Latinoamérica alejada de México es tan impensable como escribir la historia de nuestra moderna literatura sin Rulfo, Octavio Paz o Carlos Fuentes.

La idea de esta Comunidad Sudamericana fue de *copyright* brasileño. La del Mercosur ampliado al Norte con Venezuela es invención de una Caracas rumbosa, que arrastra al resto con una chequera en la mano, como lo hemos visto estos días con su presidente comprando bonos de tesoro argentino en Buenos Aires o recorriendo pueblitos del interior uruguayo regalando millones de dólares a cooperativas obreras, es-

celas u hospitales. No se trata, por cierto, de una gran construcción estratégicamente pensada, sino de un huracán voluntarista que a golpes de dinero y de retórica va armando sobre la marcha alianzas y conflictos.

Vale la pena agregar que esta alianza bolivariana se basa en la idea de la “afinidad ideológica” de los gobiernos, concepto bien peligroso en materia internacional, pues no responde a los intereses más permanentes de los Estados, introduciendo en cambio una variable partidista de dudosa estabilidad. Si el año que viene cambia el signo en Brasil y tenemos a Serra de presidente, por vencer a Lula, o en México, si López Obrador se impone, venciendo al PRI y al PAN, ¿mantenemos estos mismos esquemas o los volvemos a modificar?

Pasado todo esto por un cerridor, lo que nos queda en la mano es un gran desencanto sobre el reformismo de los años ochenta y una estrategia confusa que se traduce en la debilidad de las estructuras que trabajosamente se habían venido configurando. A tal punto se advierte que mientras el ALCA se desvanece en el horizonte, Estados Unidos construye otro ALCA pragmá-

tico mediante acuerdos de libre comercio con América Central, República Dominicana, Chile, Perú y próximamente Colombia y Ecuador. La Comunidad Andina se resquebraja por el cambio de rumbo hacia el Sur de Venezuela y el Mercosur, a su vez, se amplía geográficamente, pero no se consolida institucionalmente, pues no se aproxima a la coordinación macroeconómica y al arancel externo común ya no le caben más perforaciones.

Felizmente, las economías crecen. La demanda internacional empuja y los valores de la carne, la soja, el petróleo generan expansión. Todos los gobiernos del área, buenos, regulares o malos, de un signo u otro, registran crecimiento. Sin embargo, ese crecimiento no lleva al buen humor, porque persiste la desocupación y la pobreza no cede. El mismo Chile, la economía de mayor dinamismo, mantiene uno de los peores registros de desigualdad en la distribución del ingreso. La esperanza viene de una inversión extranjera que ha vuelto a crecer y que, al amparo del crecimiento, genera nuevas oportunidades. El ciclo mundial es favorable. En el plano nacional, los países lo están aprovechando —o desaprovechando— en grados muy variables. La región, como región, infortunadamente, termina este 2005 más confundida que nunca, aunque los discursos digan otra cosa.

Julio María Sanguinetti es ex presidente de Uruguay (1985-1990 y 1995-2000).

Viene de la **página anterior**

nación: o lo somos o no lo somos. Los primeros son divisibles, mientras los segundos son de categoría no divisible, y por tanto de naturaleza más conflictiva. La distinción, sin embargo, no siempre es tajante, ya que las cuestiones no divisibles acostumbra a tener componentes que son negociables. Pienso que esto es algo a tener en cuenta, aunque en ocasiones haya que reconocer que aún no hemos descubierto maneras concretas de resolverlos.

Si admitimos, y parece que

El conflicto como pegamento de la España plural

todos estamos de acuerdo, que somos un país plural con intereses no siempre coincidentes, que las autonomías han venido para quedarse y que vivimos en una economía en permanente y rápida transformación que nos plantea problemas de crecimiento y redistribución de la riqueza,

entonces tenemos que concluir que el conflicto será una característica persistente de la España plural. Si aceptamos esta realidad, nadie puede pretender establecer ninguna clase de orden permanente e inalterable, ya sea el que pretende el “blindaje” autonómico o el de la petrificación de la Constitución. A lo único que podemos aspirar es a “ir saliendo al paso” de un conflicto al siguiente, generando de esa forma un modo práctico y efectivo de resolver problemas. Dicho de otra forma, será el esfuerzo continuado para resol-

ver los conflictos cotidianos lo que nos mantendrá unidos, no la búsqueda de un inexistente equilibrio estacionario que nos mantenga juntos pero separados.

Pienso que el Estatuto es un documento farragoso con propuestas conflictivas que nacen de un compromiso que en su totalidad no complace a ninguna de las partes que lo han apoyado en el Parlamento catalán. Pero, por todo lo anterior, pienso también que la negociación y la práctica en tratar esas propuestas entre todos los españo-

les, dentro y fuera de las instituciones políticas, puede ser el pegamento que nos permitirá vivir unidos y afrontar los problemas reales que tenemos como sociedad: afianzar la democracia, fortalecer Europa y enfrentarnos a esos cambios profundos que llamamos globalización y que son un reto para nuestro bienestar. Juntos podremos, separados será prácticamente imposible.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

CARTAS

AL DIRECTOR

Viene de la **página anterior**

viuda, Araceli, y a todas las personas que han sufrido y siguen sufriendo la violencia de la persecución.— **Maite Leanizbarrutia**, Gesto por la Paz de Mallabia-Ermaua.

Nombre y apellidos

El pasado día 7 de diciembre, don Miguel Ángel Quintanilla Fisac solicitó en las páginas de su periódico ayuda para dar a conocer a sus amigos su segundo apellido y aclararles que él no es el firmante de un manifiesto titulado *En defensa de la Constitución española*. “De paso”, afirmó que eso con lo que él no tiene nada que ver es un “ataque al espíritu constitucional” y que mi apoyo me acredita como “habitual firmante de ma-

nifiestos promovidos por el Partido Popular”.

Dice hablar de mi nombre, pero habla de mí. Lamenta que el suyo se asocie a “manifiestos de este tipo”, pero “su” nombre es “nuestro” nombre—suyo, mío y de algunas personas más—. Puede pretender que no se le asocie a él, no a su nombre. Le sugiero, y se lo agradecería, que se identifique siempre con sus dos apellidos y pida que se respete esa preferencia (como ocurre en el citado manifiesto).

Preciso los datos a los que el señor Fisac aludió: soy profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia y secretario de redacción de la revista *Cuadernos de Pensamiento Político*, editada por FAES; que yo recuerde, he firmado cuatro manifiestos en mi vida, aunque puede que firme más: uno titulado *Democracia sin ira*, difundido por FAES en abril de 2003 sobre la guerra de Irak; otro, del Comité Internacional por la Democracia en Cuba (Václav Havel, Ma-

deleine Albright, José María Aznar, Mario Vargas Llosa, Adam Michnik y André Glucksmann, entre otros); el que menciona explícitamente Fisac, impulsado por quienes fueron presidentes del Congreso y del Senado durante la legislatura constituyente (al parecer, ahora contrarios a la Constitución “en espíritu”), y, finalmente, uno que pedía que nos cambiaran un balón de fútbol ahuevado por otro algo más esférico (con 12 años, cursado a la dirección de mi colegio a iniciativa del delegado de clase, cuya militancia política ignoro).

Ninguno, pues, ha sido promovido por el Partido Popular, aunque es cierto que el último mencionado tenía una clara *vocación de partido*. No sé si esta serie da para hablar de un “tipo”, pero probablemente sería el de los manifiestos que defienden la democracia y los balones esféricos. Los que tienen que ver con votar, no votar, botar y no botar.— **Miguel Ángel Quintanilla Navarro**. Murcia.

Pena de muerte

Nuevamente, un asesinato legal es noticia de portada en los diarios. Esta vez, el de Stanley Tookie Williams, en San Quintín, California.

Parece mentira que, en pleno siglo XXI, se mantengan atavismos de justicia basada en el talión, despreciando cualquier forma de respeto a los derechos fundamentales del hombre.

Creo recordar que fue Sartre quien enunció la idea de que la pena de muerte es el más cruel de los asesinatos porque implica que, al penado, se le avisa del día, la hora y la forma en que va a morir y, mientras llega el momento, se le mantiene recluido en un almacén de muertos expectantes.

La pena de muerte no es una pena eficaz, y baste ver que los lugares en que se aplica no tienen, precisamente, los índices de criminalidad más bajos. Tampoco es una pena justa, porque supone castigar un hecho execrable

con otro o el mismo hecho execrable. Y, por último, no contribuye en nada a la reinserción del delincuente en la sociedad.

El gobernador de California no ha querido hacer uso del derecho de gracia con Williams, y esa muerte debe caer sobre su conciencia, pero ése es el mal menor. Lo deseable es que la pena de muerte desaparezca de todas las regulaciones legales del mundo, en cualquier tiempo y lugar y que nadie tenga el derecho de considerar si la aplica o la condona.

Pongo el acento en que no quiero entrar a considerar si Williams estaba rehabilitado, si su juicio fue justo y la condena es o no adecuada al delito cometido. Todo eso serían “ademases” (si se me permite la licencia lingüística) a la esencia del problema. La pena de muerte (y la tortura) debe ser definitivamente erradicada de todos los ordenamientos jurídicos. A partir de ahí, empecemos a construir la democracia.— **Isidoro Sánchez Vila**.